

Resumen de la Jornada sobre Soberregulación en el Sector Agroalimentario organizada por el GIS

Madrid, xxx de noviembre de 2025

La jornada organizada por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) reunió a un conjunto amplio de expertos de toda la cadena agroalimentaria para analizar el impacto creciente de la soberregulación en Europa, en España y en las comunidades autónomas. La discusión puso de manifiesto un consenso general: la regulación es necesaria, pero el volumen, la frecuencia y la complejidad de las normas actuales están comprometiendo la competitividad y la viabilidad de productores, industria y distribución.

El objetivo principal era ofrecer un espacio de reflexión conjunta, identificar puntos en común y sentar las bases para elaborar un documento sólido que pueda elevarse a asociaciones, Administraciones y, eventualmente, a Bruselas.

La proliferación incesante de nuevas normativas y los problemas prácticos que esta acumulación genera en el sector se han convertido en el verdadero problema de todo el sistema alimentario, desde la producción primaria hasta la distribución alimentaria.

Las estrategias del *Green Deal* y *Farm to Fork* de la anterior Comisión Europea han multiplicado las exigencias en bienestar animal, medio ambiente, trazabilidad y emisiones, entre otros ámbitos. La avalancha normativa, mal coordinada entre las distintas direcciones generales europeas, provoca un aumento de costes sin precedentes y una inseguridad jurídica que desincentiva la inversión. La apertura o ampliación de una explotación ganadera puede requerir entre cuatro y cinco años solo en trámites burocráticos. Esta situación ha generado, incluso, incoherencias del mercado único en materia de importaciones, citando ejemplos como los huevos ucranianos producidos bajo sistemas prohibidos en la UE o el aumento de la entrada de carnes de terceros países con estándares muy inferiores.

Desde la industria y la distribución, se observa que los costes derivados de la regulación tienden a trasladarse, en mayor o menor medida, al consumidor final. Criticó que la opinión pública atribuya la subida de precios al sector sin tener en cuenta estos factores regulatorios.

Todos los expertos coincidieron en la ausencia de evaluaciones de impacto rigurosas antes de poner en marcha nuevas normas europeas y nacionales.

Sin embargo, aunque todos coincidieron también que desde Europa se percibe una cierta pausa regulatoria, la realidad es que siguen avanzando reformas de gran calado, y las empresas deben operar en un entorno donde confluyen simultáneamente normativas europeas, estatales y autonómicas que no siempre son coherentes entre sí. La contradicción administrativa genera costes invisibles pero muy relevantes.

Hay que avanzar hacia una regulación más flexible y eficiente, ya que esto afecta especialmente a las pymes de productores agroalimentarios y pesqueros, pero también al comercio y a la distribución, que no disponen de los recursos necesarios para interpretar y aplicar continuamente nuevas normas. Los expertos destacaron, además, la creciente divergencia entre comunidades autónomas, que genera una multiplicidad de obligaciones difícil de gestionar para empresas con presencia nacional.

En el ámbito de la producción agrícola, los productores se quejan de que cada día pueden usar menos productos fitosanitarios para mantener sus cultivos en buen estado, porque las autoridades están eliminando algunos que eran antiguos, aunque no tengan sustituto y el registro de nuevas materias activas puede tardar entre 9 y 12 años y costar más de 300 millones de euros, lo que ha conducido a una reducción progresiva del catálogo disponible. En general la UE aplica un exceso de precaución que frena la innovación y compromete la seguridad alimentaria, además de contribuir a que Europa esté perdiendo competitividad y autonomía por decisiones regulatorias desalineadas con la evidencia científica.

A lo largo de la jornada surgieron múltiples problemas transversales: la pérdida de competitividad frente a terceros países con normativas más flexibles, la desmotivación entre productores ante una carga administrativa desbordante, la creciente concentración empresarial derivada de la imposibilidad de las pequeñas explotaciones de asumir la burocracia, y la dificultad de comunicar al consumidor el peso real de la regulación en los precios de los alimentos. Incluso se planteó la posibilidad de estudiar mecanismos para visualizar el coste regulatorio, aunque se reconoció la complejidad operativa de esta medida.

En la parte final del encuentro se enfatizó la importancia de la colaboración. Los participantes coincidieron en que el sector debe articular un mensaje común, basado en evidencias, para solicitar evaluaciones de impacto reales, armonización normativa, plazos razonables, reciprocidad estricta en importaciones y un marco que facilite la innovación.

La regulación es imprescindible, pero la sobrerregulación se ha convertido en un riesgo estructural para el sector agroalimentario. Avanzar hacia una regulación más inteligente, coherente, basada en ciencia y con un análisis real de impacto es fundamental para garantizar la competitividad del sector español y europeo en los próximos años.

El reto de la cadena alimentaria es desarrollar una iniciativa, en colaboración con los consumidores, para mostrarles la realidad de la sobrerregulación con cifras y hechos. Hay que conseguir mostrarles que los productores de alimentos están cumpliendo una serie de normas que no contribuyen ni a incrementar la calidad ni a la seguridad alimentaria de los productos, tampoco al deterioro del medio ambiente ni del bienestar animal, que solamente contribuyen a incrementar los precios de los alimentos y bebidas, bien por el encarecimiento propio de los mismos o por el descenso de la oferta por la desaparición de productores y por tanto la demanda hace que el PVP aumente.

Conclusión

La simplificación normativa es una condición de supervivencia del sector. El objetivo: regulación sí, pero inteligente, coherente, evaluada y aplicable.